

COLUMNAS®

— REVISTA LEGAL —
LEGAL MAGAZINE



MUNIZ
OLAYA
MELENDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados

NÚMERO 211



EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

Regulación pendiente en el sector eléctrico: Reglamento de la generación distribuida

Pending Regulation in the Electricity Industry: Distributed Power Generation Regulations

Impacto del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) en el sector agroexportador

The impact of the supplementary risk work insurance (SCTR) in the agricultural export industry

La capacidad presupuestal y su relación con el desarrollo de infraestructura

Budget Capacity and its Relation with Infrastructure Development

Implicancias tributarias del nuevo valor de la UIT

Tax implications of the new taxation unit value



A ver el vaso medio lleno (y no medio vacío)

JUAN JOSÉ CORDOVA BENAVIDES
Gerente General
CEO de Textil del Valle

5



COMENTARIO TRIBUTARIO

Implicancias tributarias del nuevo valor de la UIT

OSMAN ZEVALLOS MIRANDA
Asociado Senior, especialista en derecho tributario - sede Arequipa

8



Regulación pendiente en el sector eléctrico: Reglamento de la generación distribuida

HILDA FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
Asociada, especialista en derecho administrativo y electricidad

12



LEGAL TECH

Las criptodivisas

ALFREDO LAU-TAM OYAFUSO
Socio, especialista en Fintech, mercado de capitales y regulación bancaria

15



EL EXPERTO

La capacidad presupuestal y su relación con el desarrollo de infraestructura

DIEGO MORI FRANCO
Asociado, especialista en infraestructura, APP y OxL

18



DESDE EL CONGRESO

- * Extender hasta los 75 años el cese laboral por límite de edad.
- * Contrato a plazo indeterminado para trabajadores del sector agroexportador.

21



COMENTARIO LABORAL

Impacto del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) en el sector agroexportador

PABLO VELÁSQUEZ FLORES
Asociado senior, especialista en derecho laboral - Sede Ica

23



La efectiva articulación interinstitucional como reto de cara a la implementación de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal

LUCILA BARJA OTERO
Asociada, especialista en minería y desarrollo sostenible

26



29

Actividades institucionales



COLUMNAS
REVISTA LEGAL
NÚMERO 211

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2007-07703

Número anterior N° 210

ESTUDIO MUÑIZ
MUÑIZ OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO & HERRERA
Abogados

Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

OPENSAC IDEAS & SOLUCIONES | editor.open@gmail.com
T-(51) 936 645 459

A la derivaⁱ

"Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino."

Mahatma Gandhi

La última crisis política, gatillada el 7 de diciembre del 2022 por el frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo, agudizada luego por la brutal represión policial y militar del gobierno de la presidenta Dina Boluarte en contra de los manifestantes que, en parte pretendían desconocer su investidura y, de otro lado, reclamaban por las consecuencias de esa injustificada e inédita represión (que a la fecha ha cobrado más de 60 víctimas) parece haber amainado, pese a que el Congreso de la República (cuyos índices de desaprobación ciudadana siguen en "picada" y son verdaderamente de escándalo), como era previsible, decidiese archivar el proyecto de reforma constitucional para el tan esperado adelanto de elecciones.

En medio de esta latente crisis política tres puntuales hechos de importancia añaden preocupación al actual panorama económico/social: i) la alarmante brecha de infraestructura, tan necesaria para nuestro desarrollo en las actuales circunstancias, que según cifras del Plan Nacional de Infraestructura alcanzan en el corto plazo los S/ 117 mil millonesⁱⁱ; ii) la contracción de la economía peruana en 1.12% durante el mes de enero, luego de 23 meses de crecimiento continuo después de "terminada" la pandemia por la COVID 19ⁱⁱⁱ, y iii) el impacto económico, cuyas

cifras aún son muy incipientes, producto del fenómeno climatológico que ha afectado la costa norte de nuestro país, que incluso provocó la activación de más de una decena de quebradas en el departamento de Lima.

¿Qué medidas adoptarán el Poder Ejecutivo y Legislativo para hacer frente a tan difícil coyuntura? Muy pronto lo sabremos, pero de algo deberían estar seguros los protagonistas de ambos poderes públicos: no deberán seguir haciendo lo mismo que en los dos últimos años porque ningún resultado distinto conseguirán, salvo el de seguir llevando el país al despeñadero. Y las movilizaciones sociales una vez más podrán resurgir, quizás con más impacto que las de hace pocas semanas. Ojalá que no.

Crucial participación deberán tener las organizaciones políticas y sus líderes visibles. Me refiero sobre todo a los extremos recalcitrantes, la extrema izquierda y su narrativa sobre la necesidad de la convocatoria de una asamblea constituyente para una "nueva" constitución y la extrema derecha con la suya, que consiste básicamente en descalificar a todo aquel que no comparta su "dogma" (si no piensas lo mismo que yo, o si lo que haces es un poco distinto, eres un terrorista o en el mejor de los casos un despreciable "caviar"). Ambos extremos, lados de una misma y falsa moneda. ¶



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ
Socio principal - editor

ⁱ a la deriva (según el Diccionario de la lengua española de la RAE)
1. loc. adv. Dicho de navegar o de flotar: A merced de la corriente o del viento.
2. loc. adv. Sin dirección o propósito fijo, a merced de las circunstancias.

ⁱⁱ https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=6082&Itemid=100674&lang=es&language=es-ES

ⁱⁱⁱ <https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/>

Adriftⁱ

"Keep your thoughts positive, because your thoughts become your words. Keep your words positive, because your words become your behavior. Keep your behavior positive, because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive, because your habits become your destiny."

Mahatma Gandhi

The most recent political crisis, triggered on December 7, 2022, was the failed coup d'état by Pedro Castillo, later exacerbated by the brutal police and military repression of President Dina Boluarte's administration against protesters who, on one hand, rejected her investiture and, on the other hand, complained for the consequences of such unjustified and unseen repression (which to date has a count of more than 60 victims). This seems to have died down, although the Congress of the Republic (which citizen approval ratings are still "going downhill" and are truly shocking) dismissed the constitutional reform bill for the highly anticipated calling of snap elections, as expected.

Amidst the dormant political crisis, three key hallmark facts add concern for the current economic and social situation: i) the alarming infrastructure gap, essential for our development under the current circumstances, and which according to the National Infrastructure Plan figures reaches PEN 117 billion in the short termⁱⁱ; ii) the contraction of the Peruvian economy in 1.12% during January, after 23 months of continuous growth since the "end" of the COVID-19 pandemicⁱⁱⁱ, and iii) the economic impact, which figures are at a very early stage, and is a result of the meteorological phenomenon that

has affected the northern coast area of our country; this even caused landslides in more than ten ravines in the department of Lima.

What measures will the Executive and Legislative Branches adopt to face such a difficult situation? We will find out soon, but the leading characters in both government branches must be sure of something: they must stop doing the same they have been doing during the last two years, as no result will be achieved other than bringing the country to the very edge of the precipice. Social protests could come back once again, maybe with a harder impact than those from a few weeks ago. Let us hope not.

The participation of political organizations and their visible leaders will be of the utmost importance. I talk about the most recalcitrant extremes: the far left and their narrative on the need to call for a constituent assembly for a "new" constitution, and the far right with theirs, basically consisting of disqualifying anyone who does not share their "dogma" (if you don't think as I do, or if you act a bit different than me, then you are a terrorist or a despicable "caviar" - a leftist with money - at best). Two extremes, two sides of the same fake coin. |||

ⁱ adrift (as defined by the Cambridge Academic Content Dictionary)
 1. Adj. adv. (Of a boat) Not fastened and moving with the sea and wind, or
 2. Fig. Not controlled and living without a clear purpose or direction

ⁱⁱ https://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=6082&Itemid=100674&lang=es&language=es-ES

ⁱⁱⁱ <https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/>



A ver el vaso medio lleno (y no medio vacío)

No podemos ser ajenos a nuestra realidad y debemos ser optimistas pero realistas. A pesar de tanta incertidumbre, falta de institucionalidad, el incremento clamoroso de la corrupción e inseguridad, nuestro país sigue avanzando, aunque en piloto automático como dicen muchos. No estamos aprovechando las oportunidades que nos da el mercado mundial convulsionado hoy en día, en donde el Perú en otra posición debería ser fuente de inversión (este año la inversión privada será 0%) y de generación de empleo formal, pero todo esto no quieren nuestros gobernantes y congresistas. Increíble, pero cierto. Quienes elegimos para que nos brinden oportunidades hoy nos quieren sumergir en un mar de incertidumbre, pero no todo está perdido.

Los líderes que comandamos las distintas empresas privadas del país, los gremios y asociaciones que

representan a más y más peruanos que quieren trabajar formalmente dentro de un marco de la legalidad en donde se respeten las reglas de juego por ambas partes y que buscan el desarrollo continuo del país, tenemos hoy una gran responsabilidad. Desde nuestra posición defendamos nuestra Patria, a las empresas y, así, los puestos de trabajo de tantos peruanos; seguir nuestro propósito y urge más que nunca un liderazgo empresarial potente, donde un conjunto de líderes con objetivos comunes puedan ayudar, conjuntamente con el Estado, a trazar la ruta de desarrollo del país. Necesitamos "construir puentes", no podemos seguir estando tan distanciados, necesitamos curar heridas porque las necesidades de nuestros ciudadanos no esperan. Trabajemos en diferentes frentes, por zonas de influencia, por sectores y por necesidades, y pongamos sobre la mesa soluciones y nos más problemas. Este desafío es de todos y necesitamos líderes activistas más humanos, más cercanos

a la gente, que miren hacia fuera, inspiradores, empáticos, visionarios y con valores bien puestos, que prediquen con el ejemplo. Necesitamos recuperar la confianza de la población en las empresas y sus líderes, y sobre todo comunicar más y mejor las acciones que vienen dando las empresas hoy en día a sus colaboradores, comunidades y medio ambiente.

Michel Porter decía: "El 95% de las personas tienen buenas ideas, pero solo el 5% es capaz de llevarlas a cabo". Hoy necesitamos contradecir a Porter y ponernos todos a hacer, pasar del *think* al *do*, ¿y cómo lo hacemos? Uniéndonos. Esto no solo es tarea del sector privado, sino también de todos los peruanos. Ya hemos demostrado que unidos frente a un objetivo común somos más fuertes y nuestra querida selección de fútbol lo demostró, ¿por qué no pensar que podemos hacer lo mismo en otros frentes? ¡Sí se puede!

Como bien decía Jorge Basadre: "El Perú es mucho más grande que sus problemas", y hoy, si todos no hacemos algo por nuestro país, es posible que mañana veamos el vaso medio vacío. |||

**No podemos ser
ajenos a nuestra
realidad y debemos
ser optimistas,
pero realistas. A
pesar de tanta
incertidumbre, falta
de institucionalidad, el
incremento clamoroso
de la corrupción e
inseguridad, nuestro
país sigue avanzando,
aunque en piloto
automático como dicen
muchos.**



JUAN JOSÉ CORDOVA BENAVIDES
Gerente general de Textil del Valle
CEO of Textil del Valle

Seeing the glass half-full (and not half-empty)

We cannot be strangers to our own reality; we must be realistic but also optimistic. Despite uncertainty, lack of an institutional framework, the manifest increase of corruption and insecurity, our country keeps moving forward, albeit in autopilot as many would say. We are not taking advantage of the opportunities given to us by the current troubled world market, where Peru would otherwise be a source of investment (this year private investment will be 0%) and formal employment generation, but our leaders and congressmen don't want that. Unbelievable, but true. Those we voted to provide us opportunities are the same who want to sink us in a sea of uncertainty, but not everything is lost.

The great responsibility now is of leaders of the different private companies in the country, unions and associations representing each time more Peruvian citizens who want to work formally within a legal framework where game rules are respected by both parties and who look for the continuous development of the country. From our position, we should defend our country, companies and thus, the jobs of many Peruvian citizens. We should follow our purpose, and it is urgent - more than ever - the existence of a strong corporate leadership in which a group of leaders with common goals may help, along with the State, to outline the route to development for our country. We need to "bridge gaps", we cannot remain aloof. We need to heal the wounds, because the needs of our citizens cannot wait. Let us work in different fronts, by areas of influence, sectors and needs, and let us bring solutions to the table rather than more problems. This is everyone's challenge and we need activist leaders which are more humane, closer to people, forward-looking, inspirational, empathetic, visionaries and with deeply rooted values, who lead by example. We need to regain the trust of the population, of the companies and their leaders, and, more importantly, communicate more and better the actions companies are currently taking regarding their workers, communities and the environment.

Michael Porter said: "Ninety-five percent of people

have good ideas, but only five percent can execute them". We now need to contradict Porter and shift our gears from "thinking" to "doing". But, how do we do that? Uniting. This is a task for the private sector, but also for all Peruvian citizens. We have proven that uniting for a common goal makes us stronger, as we have seen with our beloved football team. Then, why can't we think of doing the same in other fronts? Yes, we can!

As Jorge Basadre once said: "Peru is larger than its problems", and if we all strive for our country today, there is a chance we will all see the glass halffull tomorrow. |||



Implicancias tributarias del nuevo valor de la UIT

Mediante Decreto Supremo N° 309-2022-EF, se fijó el valor de la UIT para el 2023 en S/ 4,950.00. A partir de ello, presentamos un breve resumen de las principales implicancias tributarias de este nuevo valor, pues distintas normas han fijado límites, bases imponibles, entre otros, dependiendo del valor de la UIT de cada año.

I) LÍMITES A LAS DEDUCCIONES PARA DETERMINAR LA RENTA NETA EMPRESARIAL:

Gastos en vehículos: No son deducibles los gastos en vehículos automotores cuyo costo de adquisición supere 26 UIT, considerándose la UIT correspondiente al ejercicio gravable en que se efectuó la mencionada adquisición.

Gastos de representación: Son deducibles en la parte en que no excedan 0.5% de los ingresos brutos con un límite de 40 UIT.

Gastos representados en boletas de venta y tickets: Son deducibles los gastos sustentados con boletas de venta o tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos por contribuyentes que pertenezcan al Nuevo RUS, hasta el límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 UIT.

2) REGISTROS Y LIBROS CONTABLES:

En la Resolución de Superintendencia N° 234-2006-SUNAT (y modificatorias) se reguló qué libros y registros contables deben llevar los contribuyentes dependiendo de los ingresos brutos anuales que tengan en el ejercicio anterior y la UIT del año vigente. Así, se fijó la obligación de llevar distintos libros y registros contables considerando si el contribuyente no supera las 300 UIT de ingresos brutos; obtenga ingresos brutos que estén entre 300 hasta 500 UIT; entre 500 y 1700 UIT; e ingresos superiores a 1700 UIT.

3) UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PAGO:

El pago de sumas de dinero de las siguientes operaciones por importes iguales o superiores a 1 UIT, inclusive cuando se realice parcialmente, solamente puede ser efectuado utilizando medios de pago: constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles; transferencia de vehículos; y adquisición, aumento y reducción de participación en el capital social de una persona jurídica.

4) IMPUESTO A LA RENTA DEL TRABAJO:

A los perceptores de rentas del trabajo se les permite deducir 7 UIT y además 3 UIT por gastos

deductibles realizados en restaurantes, bares, hoteles, servicios turísticos, alquiler de inmuebles aportes a EsSalud por trabajadores del hogar, servicios profesionales, entre otros.

Asimismo, los tramos de aplicación de las tasas del Impuesto a la Renta se fija de acuerdo con:

Renta neta del trabajo y de fuente extranjera	Tasas
Hasta 5 UIT	8%
Más de 5 UIT hasta 20 UIT	14%
Más de 20 UIT hasta 35 UIT	17%
Más de 35 UIT hasta 45 UIT	20%
Más de 45 UIT	30%

5) IMPUESTO DE ALCABALA:

El tramo inafecto del Impuesto de Alcabala es de las 10 primeras UIT del valor del inmueble.

6) IMPUESTO PREDIAL:

El impuesto se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva acumulativa establecida en hasta 15 UIT (0.2%); más de 15 UIT hasta 60 UIT (0.6%); y más de 60 UIT (1%).

Las municipalidades pueden establecer un monto mínimo a pagar equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto.

7) IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR:

La tasa del impuesto es de 1% sobre el valor del vehículo. En ningún caso el monto a pagar será inferior a 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto.



OSMAN ZEVALLOS MIRANDA

Asociado Senior, especialista en derecho tributario – sede Arequipa
Senior Associate, Tax Law specialist - Arequipa office
ozevallosm@munizlaw.com



Tax implications of the new Taxation Unit Value

By Supreme Decree No. 309-2022-EF, the value of Taxation Units for 2023 was fixed at PEN 4,950.00. From there, we present a brief summary of the main tax implications of this new value, as different regulations have fixed limits, taxable incomes, among others, depending on the Taxation Unit value of every year.

1) DEDUCTION LIMITS TO DETERMINE THE NET BUSINESS INCOME:

Vehicle expenses: automobile vehicle expenses which purchase cost exceeds 26 Taxation Units are not deductible, considering the Taxation Units corresponding to the taxable year in which said purchase was made.

Representation expenses: Deductible provided they do not exceed 0.5% of gross income with a limit of 40 Taxation Units.

Expenses represented in sales receipts and tickets

Expenses proved with sales receipts or tickets which do not grant such right are deductible, issued by tax payers belonging to the New Single Simplified System (RUS), up to a 6% limit in the credited amounts through payment receipts granting the right to deduce expenses or costs. This limit cannot exceed 200 Taxation Units within the taxable year.

2) RECORDS AND ACCOUNTING BOOKS:

Superintendency Resolution No. 234-2006-SUNAT (as amended) provided which accounting books and records do taxpayers have to keep depending on the annual gross income they had the previous fiscal year and on the Taxation Unit of the current fiscal year. Thus, a requirement to keep different accounting books and registers was set out considering taxpayers do not exceed a gross income of 300 Taxation Units; they have a gross income between 300 and 500 Taxation Units; a gross income between 500 and 1700 Taxation Units; and an income above 1700 Taxation Units.

3) USE OF PAYMENT METHODS:

The payment of sums of money for the following operations for amounts equal or above 1 Taxation Unit, even when partially made, can only be made using the following payment methods: conveyance or transfer of real estate property rights on property; vehicle transfer; and acquisition and reduction of social capital stakes of a legal entity.

4) LABOR TAX IMCOME:

Income recipients are allowed to deduct 7 Taxation Units and an additional 3 Taxation Units for deductible expenses made in restaurants, bars, hotels, touristic services, real estate rent, contributions to EsSalud for domestic employees, professional services, among others.

Furthermore, application tiers of Income Tax rates is fixed as follows:

Net taxes on national and foreign labor income	Rates
Up to 5 Taxation Units	8%
More than 5 Taxation Units and up to 20 Taxation Units	14%
More than 20 Taxation Units and up to 35 Taxation Units	17%
More than 35 Taxation Units and up to 45 Taxation Units	20%
More than 45 Taxation Units	30%

5) REAL ESTATE TRANSFER TAX:

The unaffected part of the Real Estate Transfer Tax is the 10 first Taxation Units of the real estate value.

6) PROPERTY TAX:

The tax is calculated applying the accumulative progressive scale to the taxable income. It is established in: up to 15 Taxation Units (0.2%); more than 15 and up to 60 Taxation Units (0.6%); and more than 60 Taxation Units (1%).

Municipalities can set a minimum payable amount equivalent to 0.6% of the current Taxation Unit valid as of January 1st of the year corresponding to the tax.

7) VEHICLE OWNERSHIP TAX:

The tax rate is 1% of the value of the vehicle. The payable amount shall never be lower than 1.5% of the current Taxation Unit valid until January 1st of the year corresponding to the tax. |||



Regulación pendiente en el sector eléctrico: el reglamento de generación distribuida

La diversificación de la matriz energética nacional es el primer objetivo de la Política Energética Nacional para el periodo 2010-2040, aprobada por el Decreto Supremo No. 064-2010-EM, y dentro de sus lineamientos encontramos **la promoción del uso intensivo y eficiente de la generación distribuida**.

En términos generales, la generación distribuida habilita la instalación de equipos para generar electricidad cerca del lugar donde se utilizará la referida energía, a diferencia de la generación de energía a través de plantas de generación ubicadas en lugares distantes y que requieren

de líneas de transmisión para abastecer a los usuarios.

En esta misma línea, el Osinergmin¹ la denomina “generación in-situ o generación descentralizada, en contraposición con el sistema convencional de generación centralizada que se caracteriza por un sistema interconectado que requiere altas inversiones en plantas de generación de energía eléctrica y líneas de transmisión”. En ese sentido, la generación distribuida es distinta dado que habilita el suministro de energía desde una ubicación más cercana al usuario, ya sean usuarios domiciliarios o empresas.

Si bien la reglamentación de la generación

¹ https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/lInstitucional/Estudios_Economicos/RAES/RAES-Electricidad-diciembre-2018-GPAE-OS.pdf

distribuida en el Perú se encuentra pendiente de aprobación desde el año 2018, contamos con un marco legal general que ha permitido la implementación de dicho tipo de generación, pero en casos muy puntuales. En específico, la Ley No. 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, publicada en el año 2006, ha definido a la generación distribuida como: “*Instalación de generación con capacidad no mayor a la señalada en el reglamento, conectada directamente a las redes de un concesionario de distribución eléctrica*”.

Por otro lado, en el año 2015, mediante el Decreto Legislativo No. 1221, Decreto Legislativo que mejora la regulación de la distribución de electricidad para promover el acceso a la energía eléctrica en el Perú, se regula la generación distribuida enfocada en los usuarios del servicio público de electricidad, a quienes se les permite generar electricidad para su autoconsumo utilizando equipamiento de generación eléctrica renovable no convencional y a su vez se les autoriza inyectar los excedentes al sistema de distribución. De acuerdo con la citada norma, la potencia máxima, las condiciones técnicas, comerciales, de seguridad, regulatorias, entre otras, serían establecidas en el reglamento.

Es así que, a la fecha, la generación distribuida en el Perú comprende la conexión directa a través de las redes de empresas de distribución, sin necesidad de líneas de transmisión, y también la regulación para los usuarios, a través de equipamiento para el autoconsumo, permitiendo también inyectar los excedentes al sistema eléctrico de distribución y obtener una compensación por ello. Bajo este marco legal, se habilita a las empresas y personas naturales a abastecerse de energía utilizando generación distribuida, como es el caso del uso de paneles fotovoltaicos; sin embargo, esta regulación aún requiere de precisiones legales que faciliten y promuevan su implementación. Por ejemplo, aún no se ha regulado la manera cómo se realizaría la inyección de los excedentes al sistema de distribución y las posibles compensaciones, las potencias máximas autorizadas, entre otros aspectos.

A fin de contar con un reglamento idóneo, un punto clave consiste en evaluar la experiencia de otros países que vienen aplicando la regulación de generación distribuida. De esta manera, se promoverá el uso eficiente de recursos renovables y se facilitará el suministro eléctrico a una mayor cantidad de personas. En atención a lo anterior, urge la aprobación del reglamento para alinearnos a una práctica que viene implementándose con éxito en la región de América Latina y el Caribe². Es importante destacar que la ausencia de este reglamento no impide la generación de oportunidades de nuevos negocios utilizando el marco legal vigente. ■



HILDA FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ

Asociada, especialista en derecho administrativo y electricidad

Associate, Specialist in administrative law and electricity
hfemandez@munizlaw.com

² United Nations Environment Programme (2022). El Estado de la Generación Distribuida Solar Fotovoltaica en América Latina y El Caribe. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/40538>

Pending Regulation in the Electricity Industry: Distributed Power Generation Regulations

National power grid diversification is the first goal of the National Energy Policy for the 2010-2040 term, approved by Supreme Decree No. 064-2010-EM. One of its guidelines is **the promotion of an intensive and efficient use of the distributed generation.**

In general, distributed generation enables the installation of power generation equipment near the place where said power will be used, unlike power generated through power plants located in distant places which require transmission lines to supply the users.

On the same topic, Osinergmin¹ defines it as "on-site generation or decentralized generation, contrasting with the conventional centralized generation system consisting of an interconnected system that requires a high investment in electrical power generation plants and transmission lines". In this regard, distributed generation is different since it enables power supply from a location that is closer to users, whether it is home or company service.

Although distributed generation regulations in Peru are pending approval since 2018, there is a general legal framework that allowed implementing this type of power generation for very specific cases. Specifically, Act No. 28832, Act for ensuring electrical generation efficient development, published in 2006, has defined distributed generation as: "Power generation installation with a capacity within the limits provided in the regulations, directly connected to a power distribution concessionaire's network".

Conversely, on 2015, through Legislative Decree No. 1221, Legislative Decree improving the regulation of power distribution to promote access to electrical energy in Peru. Distributed power generation is regulated with a focus on public electrical service users; they are allowed to generate electricity for personal consumption using non-conventional renewable power generation equipment and, in turn, are authorized to inject surplus into their distribution system. According to the aforementioned

rule, the regulations set out the maximum power, as well as the technical, commercial, security and regulatory conditions, among others.

Thus, distributed power generation in Peru consists - to date - of direct connection through distribution companies' networks, without transmission lines, and also users regulation through equipment for personal consumption, allowing to inject surplus into the distribution electrical system and thus obtain a compensation for it. Under this legal framework, companies and individuals are allowed to supply themselves with electricity using distributed generation, as is the case of photovoltaic panels. However, this regulation still requires legal clarifications to facilitate and promote its implementation. For example, the way surplus injection would be made into the distribution system and the possible compensations, as well as the maximum authorized outputs, among other things, have not yet been regulated.

In order to have suitable regulations, a key point is assessing other countries' experience in the application of distributed generation regulation. Thus, an efficient use of renewable resources will be promoted and a higher number of people will have easy access to electrical supply. Regarding the aforementioned, there is an urgent need to approve the regulations so as to align into a practice successfully implemented in the regions of Latin America and the Caribbean². It should be noted that the lack of regulations does not prevent the generation of new business opportunities using the current legal framework. |||

¹ https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Económicos/RAES/RAES-Electricidad-diciembre-2018-GPAE-OS.pdf

² United Nations Environment Programme (2022). The State of Solar Photovoltaic Power Generation in Latin America and the Caribbean. <https://wedocs.unep.org/20.500.1/1822/40538>

LAS CRIPTODIVISAS

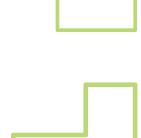
Las criptodivisas (también llamados criptoactivos) son monedas virtuales que pueden ser utilizadas para hacer pagos y otras transacciones financieras. Hoy en día existen más de 4,400 criptodivisas disponibles en el mercado, sin embargo, "Bitcoin" sigue siendo la criptodivisa más popular entre todas ellas, pues es cinco veces más grande que su competidor más cercano. Esta moneda se compra, se vende y se transfiere de manera online mediante carteras digitales y, a través de ella los consumidores pueden transferir sus criptodivisas a otras personas sin la necesidad de moverlas a través de bancos o cualquier otro tipo de intermediario financiero.

El beneficio de las criptodivisas es la reducción de costos y el aumento de velocidad en las transacciones internacionales mediante la eliminación del uso del sistema "SWIFT". Asimismo, al ser este un sistema tecnológico que funciona a través del *blockchain* se tendría un récord de los registros como los "títulos de propiedad". Sin embargo, este sistema aun presenta riesgos altos, pues no se han encontrado soluciones inmutables a temas como: (i) la gran fluctuación de valor de las criptodivisas, (ii) la inexistencia de protección contra fraudes o errores en el sistema de la moneda virtual y (iii) protección del sistema anti-hackeo.

En cuanto a la regulación a nivel internacional, Japón cuenta con una regulación progresista hacia este producto y, por ello, reconoce al intercambio de criptodivisas como "propiedad legal" en virtud del Payment Services Act (PSA). Bajo dicha regulación, deben estar registrados y cumplir con las obligaciones tradicionales de prevención de lavado de activos. Asimismo, la National Tax Agency determinó que las ganancias producidas del producto debían clasificarse como "*miscellaneous income*", en consecuencia, gravados con impuestos.

En Estados Unidos la legislación varía entre Estados, pero la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) no considera las criptodivisas como una moneda de curso legal, sin embargo, reconoce al intercambio de estas como transmisiones dinerarias. El Internal Revenue Service (IRS) considera al intercambio de criptoactivos de manera similar (contando con directrices fiscales), entonces los proveedores de este servicio deben estar registrados en FinCEN y aplicar el programa de prevención de lavado de activos, así como mantener un informe adecuado para presentar a las autoridades fiscales. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha indicado que los criptoactivos son "securities" y, por esa razón, deben ser tratados bajo las leyes aplicables a "securities-digital wallets and exchanges". Y la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha descrito Bitcoin como un "commodity", lo cual permitiría que los derivados de criptodivisas puedan ser intercambiadas de manera pública.

En el caso de China, el Banco Popular de China durante 2013 a 2020 prohibió a las instituciones financieras que formaran parte de transacciones de criptomonedas, así como





la bolsa local y minería nacional. La regulación en China ha sido bastante dura, en el 2021 con normativa aún más severa, el gobierno prohibió el uso de monedas nacionales tanto como extranjeras. Sobre lo único que se legisló de manera positiva es que estas tienen el estatus de propiedad solo para determinar herencias según el Código Civil chino.



En cuanto a los países de América Latina, la regulación varía de país a país. Por un lado, encontramos regulación que ha sido prohibitiva como es el caso de Bolivia, país que prohibió las criptomonedas y su intercambio. De la misma forma, Ecuador prohibió su circulación (a excepción del token SDE emitido por el mismo gobierno). En la esquina opuesta, países como México, Argentina, Brasil, Venezuela y Chile son plazas en donde comúnmente se aceptan a las criptodivisas como forma de pago por los minoristas y comerciantes (como permuta).



Las criptodivisas siguen siendo un tema que deja las puertas abiertas al debate; ¿se deben regular o no?, pues la preocupación de sus posibles efectos negativos en la estabilidad financiera de un país y el lavado de activos (por el anonimato de las transacciones) en la medida que este mercado crece. ■



ALFREDO LAU-TAM OYAFUSO

Socio, especialista en Fintech, mercado de capitales y regulación bancaria
Partner, specialist in Fintech, capital markets and bank regulations
alautam@munizlaw.com



Cryptocurrencies

Cryptocurrencies (also known as crypto assets) are virtual currencies that can be used to make payments and for other financial transactions. Nowadays, there are more than 4,400 cryptocurrencies available on the market. However, "Bitcoin" remains as the most popular among them, as it is five times bigger than its closest competitor. This currency is bought, sold and transferred online through digital wallets and, through them, buyers can transfer their cryptocurrencies to other people without the need to move them through banks or any other type of financial intermediate.

The benefit of cryptocurrencies is cost reductions and speed increase in international transactions by eliminating the use of the "SWIFT" system. Also, since this is a technological system that works through the blockchain, there would be a record for registers such as "title deeds". However, this system still poses high risks, as there are no steadfast solutions yet for topics such as: (i) the great fluctuation of cryptocurrency values, (ii) the lack of protection against frauds and system errors in the cryptocurrency and (iii) anti-hacking protection systems.

Regarding international-level regulation, Japan has a progressivist regulation for that product and, as such, acknowledges cryptocurrency exchanges as "legal property" in virtue of the Payment Services Act (PSA). Under such regulation, they must be registered and meet traditional money laundering prevention requirements. Likewise, the National Tax Agency determined that the earnings gained from the product should be classified as "miscellaneous income", and taxed accordingly.

In the United States, legislation varies from one State to another, but the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) does not consider cryptocurrencies as legal currencies. However, it does acknowledge their exchange as money transfers. The International Revenue Service (IRS) considers crypto asset exchanges in a similar way (with fiscal guidelines), and suppliers of this service must be registered in FinCEN and apply the money laundering prevention program, as well as keeping a proper report to submit before the tax authorities. The Securities and Exchange Commission (SEC) stated that crypto assets are "securities" and, therefore, shall be treated under the applicable laws for "securities-digital wallets and exchanges". And the Commodities Futures Trading Commissions (CFTC) described Bitcoin as a "commodity", which allows cryptocurrency derivatives to be exchanged publicly.

In the case of China, from 2013 to 2020, the People's Bank of China forbid financial institutions to become part of cryptocurrency transactions, as well as the local stock and national mining. Regulations in China were very strict. In 2021, with even stricter regulations, the government forbid the use of both national and foreign currency. The only positive legislation made stated they have property status only to determine inheritance pursuant to the Chinese Civil Code.

Regarding Latin America, regulations vary from one country to another. On one hand, we found forbidding regulations as in the case of Bolivia, where cryptocurrency and its exchange were forbidden. Likewise, Ecuador forbid its circulation (except for the SDE token, issued by the national government). On the other hand, countries like Mexico, Argentina, Brazil, Venezuela and Chile are places where cryptocurrencies are commonly accepted as a method of payment for retailers and traders (as swap).

Cryptocurrencies are still a topic open for debate: Should they be regulated or not? There is concern for their possible negative effects in the financial stability of a country and money laundering (due to the transaction anonymity) as this market's growth.





EL EXPERTO



DIEGO MORI FRANCO

Asociado, especialista en infraestructura,

APP y OxL

Associate, Specialist in Infrastructure, PPP
and OxL

dmoni@munizlaw.com

La capacidad presupuestal y su relación con el desarrollo de infraestructura

En el marco de una situación social y política complicada, la meta de ser el país en Latinoamérica con el mayor crecimiento económico en el 2023¹, suena lejana; sin embargo, no deja de reflejar la necesidad de trabajar en una agenda que, más allá de ser pendiente, resulta presente desde hace años: el desarrollo y atención a la necesidad de reducir las brechas en materia de infraestructura.

Precisamente, considerando un contexto de riesgos elevados, de una conflictividad social recurrente que genera daño en la infraestructura relacionada con transporte y, en general, con la prestación de servicios públicos, el 10 de enero pasado, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley No. 3941/2022-PE (PL), solicitando la facultad de legislar en materia de reactivación económica y modernización de la gestión del Estado con estándares adecuados de idoneidad y meritocracia en la Administración Pública, por un plazo de noventa (90) días calendario.

El PL hace énfasis en buscar el desarrollo de la infraestructura. Por un lado, busca dar marco normativo para el avance en la ejecución de las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), así como para las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) enmarcadas dentro del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC); por otro,

¹ Declaraciones efectuadas por el Ministro de Economía en el marco del evento "Perspectivas económicas y de inversión de Perú 2023", realizado en Londres (Inglaterra). Tomado de: <https://gestion.pe/economia/peru-se-propone-como-meta-tener-el-mayor-crecimiento-en-latinoamerica-en-2023-mef-noticia/>



centra el esfuerzo en generar las medidas para el cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025 (PNIC) y su implicancia en proyectos APP, es decir, centra esfuerzo tanto en inversión pública como en inversión privada.

Uno de los elementos que llama la atención es lo relativo a la necesidad de optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal (CP) para el desarrollo de los proyectos. La CP forma parte de un concepto más amplio como es el de la Responsabilidad Presupuestal (artículo 4.I, numeral 5 del Decreto Legislativo No. 1362²), el mismo que busca que las entidades públicas que planeen ejecutar proyectos de infraestructura, bajo la modalidad Asociación Público Privada (APP), antes de asumir los compromisos financieros firmes y contingentes derivados directa o indirectamente de la ejecución de los contratos para ello, verifiquen que no se comprometa en el corto, mediano ni largo plazo el equilibrio presupuestario respectivo, la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la prestación regular de los servicios públicos.

Y, ¿por qué la importancia de este concepto? El concepto de CP guarda relación con los principios de equilibrio fiscal y equilibrio presupuestario del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es decir, es fundamental para el desarrollo de una APP. Asimismo, la acreditación de CP, por parte de la entidad pública respectiva es uno de los pasos iniciales para el desarrollo de todo proyecto de inversión; sin embargo, el desconocimiento para la determinación de la misma por parte de las entidades y, por tanto, el conflicto que surge con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su calidad de ente encargado de emitir opinión sobre aquella, considerando el sustento y compromiso de priorización de recursos de la entidad titular del proyecto, hace que el inicio de este pueda verse retrasado. Precisamente, en el año 2021, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió sobre el retraso de diversos proyectos, específicamente por la falta de determinación de la capacidad CP, entre ellos, PTAR Puerto Maldonado, PTAR Cajamarca, el Anillo Vial Periférico y la Longitudinal de la Sierra Tramo 4.

¿Solución? En el año 2021, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF emitió el documento denominado “Lineamientos para la presentación del sustento de capacidad presupuestal”, precisamente como respuesta a los continuos desacuerdos entre las entidades públicas y el MEF sobre la aprobación de la ficha de CP, siendo criterios centrales la actualización permanente de la información presupuestal por parte de las entidades y el establecimiento de un procedimiento para el sustento de la capacidad presupuestal.

En ese sentido, la reducción de la brecha de infraestructura no depende exclusivamente de las propuestas del sector privado, siempre ávido de apoyar, también es necesario un continuo avance por parte de las entidades públicas en el conocimiento de las herramientas con las que cuentan para el desarrollo de los proyectos. |||

² Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Pública Privadas y Proyectos en Activos.



EL EXPERTO

Budget Capacity and its Relation with Infrastructure Development

In the framework of a complicated social and political situation, the goal to become the Latin American country with the highest economic growth in 2023¹ seems distant. However, it keeps reflecting the need to work on an agenda that is present for years, rather than pending development and addressing the need to reduce gaps regarding infrastructure matters.

Precisely, taking into consideration a high-risk context, with recurrent social conflict that creates transport-related infrastructural damage and, in general, with the provision of public services, the Executive Branch submitted - on January 10 - Bill No. 3941/2022-PE (Bill), requesting authorization to legislate with regards to economic recovery and State management modernization with proper suitability and meritocracy standards in Public Administration, for a ninety (90) calendar days term.

The Bill emphasizes on the search for infrastructure development. On one hand, it aims at providing a legal framework to progress on the execution of optimization, margin amplification, replacement and rehabilitation investments (IOARR), as well as for Reconstruction Interventions through Investments (IRI) within the framework of the Comprehensive Reconstruction Plan with Changes (PIRCC). On the other hand, it focuses the efforts in creating measures to meet the National Sustainable Infrastructure Plan for Competitiveness 2022-2025 (PNIC) and its implication on PPP projects, i.e., the focus is in both public and private investments.

One element stands out regarding the need for the optimization of the procedure, evaluation and justification of the budget capacity (CP) for project development. CP is part of a broader concept such as Budget Responsibility (Article 4.1, number 5 of Legislative Decree No. 1362²), which aims for public entities to plan the execution of infrastructure projects as Public Private Partnerships (PPP) before undertaking the firm and contingent financial commitments directly or indirectly derived from the execution of contracts for that purpose, to verify that the corresponding budget balance, public finance sustainability and frequent public service provision are not compromised on the short, medium or long term.

So, why is this concept important? The concept of CP is tightly related to the principles of fiscal budget balance and budget balance of the National Public Budget System, i.e., it is key for PPP development. Furthermore, CP accreditation by the respective public entity is one of the first steps towards the development of all investment projects. However, the lack of knowledge of entities to determine it and, thus, the conflict arising with the Ministry of Economy and Finance (MEF) in their capacity as entity in charge of expressing opinions on the matter, considering the justification and commitment of resource prioritization of the entity owning the project, makes its start may be delayed. Precisely, on 2021, the Association for the Promotion of National Infrastructure (AFIN) warned regarding the delay of different projects, specifically for the lack of establishment of CP capacity, among them are PTAR Puerto Maldonado, PTAR Cajamarca, the Peripherical and Longitudinal Road Ring of the Highlands Section 4.

The solution? On 2021, the MEF's Public Budget Headquarters issued a document called "Guidelines to present the justification for budget capacity", as a clear response to the continuous disagreements between public entities and the MEF on the approval of the CP form. The main criteria were permanent budget information updates by the entities and the establishment of a procedure to support budget capacity.

In this regard, reduction in the infrastructure gap does not exclusively depend on proposals from the private sector - which is a consistent avid supporter - it also needs continuous progress by public entities on the knowledge of the tools they possess for project development. |||

¹ Statements made by the Ministry of Economy within the framework of the event "Economic and investment perspectives of Peru 2023", held in London (England). Retrieved from: <https://gestion.pe/economia/peru-se-propone-como-meta-tener-el-mayor-crecimiento-en-latinoamerica-en-2023-mef-noticia/>

² Legislative Decree which regulates the Promotion of Private Investment through Public Private Partnerships and Projects on Assets



En el primer trimestre del 2023 destacaron dos proyectos de ley aprobados por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Extender hasta los 75 años el cese laboral por límite de edad¹

Mediante los Proyectos de Ley n.º 1505², 1535³, 2510⁴ y 2824⁵, se busca ampliar el cese por límite de edad de los trabajadores hasta los 75 años, tanto en el sector público como privado. Esta iniciativa permite que los empleados puedan solicitar trabajar por cinco años adicionales, teniendo en cuenta que la edad legal para acceder a la jubilación son los 65 años y la ley ya establecía que este plazo se extienda hasta los 70 años.

Para acceder a esta ampliación, se disponen tres requerimientos: completar la solicitud voluntaria de continuar laborando, someterse a un examen médico multidisciplinario para corroborar sus facultades físicas y mentales, y, finalmente, se requiere la necesidad del servicio por parte del empleador.

Asimismo, se dispone también que el empleador responda en los 30 días la solicitud del adulto mayor. En caso de no requerir más el puesto, se deberá sustentar objetivamente a través de un informe aprobado por el área de recursos humanos. De lo contrario, se considerará como despido nulo.

Contrato a plazo indeterminado para trabajadores del sector agroexportador⁶

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó el dictamen que pretende modificar el régimen laboral de los trabajadores de la exportación no tradicional, modificando el artículo 32 del Decreto Ley n.º 22342, Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales.

El proyecto plantea incorporar a dichos trabajadores de la exportación no tradicional al régimen laboral del Decreto Legislativo n.º 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, con la finalidad de que gocen de los beneficios incluidos en la norma. |||

* El Estudio Muñiz presenta bimestralmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (19 de febrero de 2023). Buscan extender hasta los 75 años el cese laboral por límite de edad. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/02/19/jubilacion-buscan-extender-hasta-los-75-anos-el-cese-laboral-por-límite-de-edad-congreso-pensiones-1609034>

² Proyecto de ley 1505/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTc0MDM=/pdf/PL0150521032022>

³ Proyecto de ley 1535/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxOTc=/pdf/PL0153520220328>

⁴ Proyecto de ley 2510/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzM5NzA=/pdf/PL0251020220706>

⁵ Proyecto de ley 2824/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDIyMzQ=/pdf/PL0282420220816>

⁶ (14 de febrero de 2023). Trabajadores del sector agroexportación podrían acceder a contratos con plazo indeterminado. La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/02/14/trabajadores-del-sector-agroexportacion-podrian-acceder-a-contratos-con-plazo-indeterminado-congreso-adex-sigrid-bazan-396326>



Two bills passed by the Work Committee of the Congress of the Republic stood out in the first quarter of 2023. Below is a summary of both legislative initiatives.

Extend mandatory retirement until 75 years old¹

Bills No. 1505², 1535³, 2510⁴ and 2824⁵ seek to extend mandatory retirement until 75 years old both in the public and private sectors. This initiative allows employees to request working for five additional years, considering the legal age to access retirement is 65, and law already stated a term extension until 70 years old.

To apply for this extension, three conditions are required: fill out the voluntary request to continue working, undergo a multidisciplinary medical exam to verify physical and mental capabilities and, finally, the need for service on the employer.

Likewise, it provides the employer gives an answer within a 30-day term to the senior's request. In case there is no further need for the position, that should be objectively backed up with a report approved by the Human Resources Department. Otherwise, it would be considered as void dismissal.

Indefinite term contracts for agricultural export workers⁶

The Work Committee of the Congress of the Republic passed the opinion intending to amend the non-traditional export workers work regime, amending article 32 of Decree Law No. 22342, Act on Non-Traditional Exports Promotion.

The project poses the incorporation of non-traditional export workers to the work regime in Legislative Decree No. 728, Labor Productivity and Competitiveness Act, so that those workers enjoy the benefits included in the rule.

For this, workers hired under this working mode must show proof of providing services for five continuous years to a company of that sector by the time the law is enacted. This way they will become workers under an indefinite term contract. |||

* Estudio Muñiz delivers its clients the legal product "From the Congress" on a bimonthly basis. This is a publication containing a selection of the bills currently in debate in the Congress of the Republic, which can affect the business environment. Columnas will include two of several published projects which are still under commissions.

¹ (February 19, 2023). Buscan extender hasta los 75 años el cese laboral por límite de edad. (Mandatory retirement to be extended until 75 years old). La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/02/19/jubilacion-buscan-extender-hasta-los-75-anos-el-cese-laboral-por-limite-de-edad-congreso-pensiones-1609034>

² Bill 1505/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTc0MDM=/pdf/PL0150521032022>

³ Bill 1535/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTgxOTc=/pdf/PL0153520220328>

⁴ Bill 2510/2021-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzM5NzA=/pdf/PL0251020220706>

⁵ Bill 2824/2022-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDlyMzQ=/pdf/PL0282420220816>

⁶ (February 14, 2023). Trabajadores del sector agroexportación podrían acceder a contratos con plazo indeterminado (Agricultural export workers could obtain indefinite term contracts). La República Perú. <https://larepublica.pe/economia/2023/02/14/trabajadores-del-sector-agroexportacion-podrian-acceder-a-contratos-con-plazo-indeterminado-congreso-adex-sigrid-bazan-396326>

Impacto del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) en el sector agroexportador

Al referirnos a este sector productivo, resulta pertinente considerar como fuente válida de información aquella que brinda la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP). En ese sentido, la agroexportación en nuestro país está asociada al cultivo de productos como: arándanos, alcachofas, cítricos, espárragos, granada, mango, palta, pimiento piquillo y uva.

Es en este escenario que pasamos a revisar las implicancias que ha generado la no tan lejana entrada en vigencia, a partir del 2 de julio de 2022, del Decreto Supremo N° 008-2022-SA, el cual actualizó la lista de actividades económicas riesgosas, destacándose dentro de estas las que se enmarcan con el Código 0113, que corresponde al cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos.

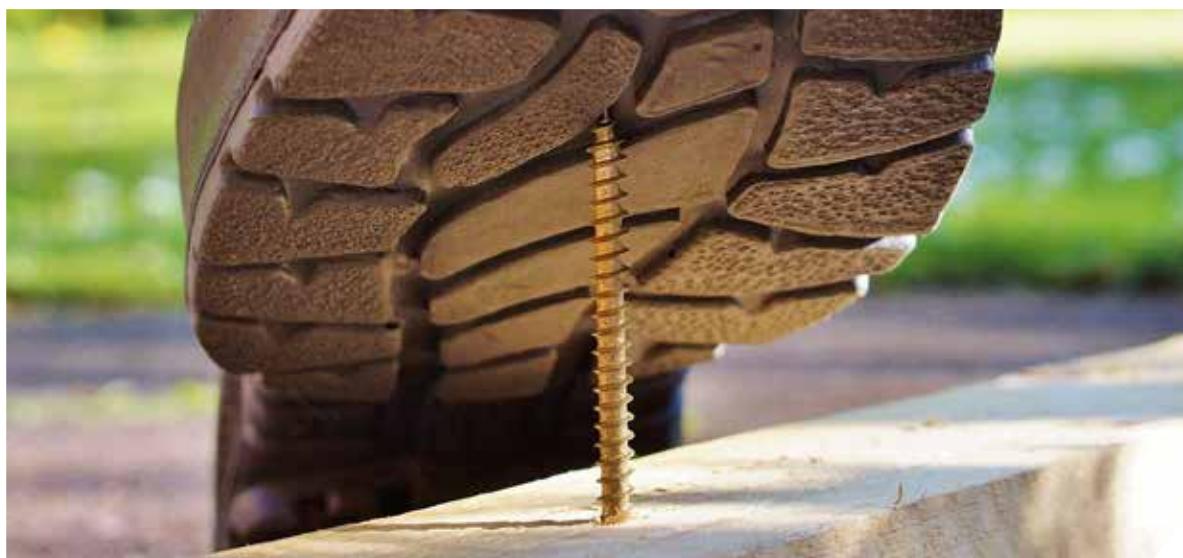
Bajo el aludido código se encuentra productos como el espárrago, la alcachofa, así como la producción de semillas; por lo tanto, los empleadores que se dedican al cultivo de estos productos deberán considerar como regla general que tienen la obligación laboral de contratar el SCTR para todos sus trabajadores ubicados en sus sedes productivas. La excepción será no contratar esa póliza para aquellos trabajadores que se encuentren distantes de las actividades riesgosas propias del giro del negocio.

Este seguro otorga una cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud y cubre los riesgos siguientes:

- Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con el Seguro Social de Salud o con la Empresa Prestadora de Salud elegida; y,
- Otorgamiento de pensiones de invalidez temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse libremente con la ONP o con empresas de seguros debidamente acreditadas.

Claramente, la norma bajo comentario busca mitigar el daño susceptible de padecer un trabajador como consecuencia de la ejecución de sus tareas agrícolas. Sin embargo, el impacto de este dispositivo legal va mas allá porque eleva los niveles de vigilancia en la salud de los trabajadores, pues al considerarse la actividad agrícola como riesgosa (CIIU 0113), esto genera como efecto espejo que los exámenes médicos ocupacionales dejen de tener una periodicidad bianual, pues ahora el empleador agrario deberá practicar obligatoriamente las evaluaciones medicas ocupacionales siguientes:

- Evaluación Médica Pre-empleo o Pre-ocupacional.
- Evaluación Médico Ocupacional Periódica (mínimo una vez al año).
- Evaluación Médico Ocupacional de Retiro o de Egreso.



Ahora bien, los empleadores del sector agroexportador deben proyectar que la cobertura del SCTR se extenderá a otros cultivos. Inferimos ello a partir del mandato que contiene el literal a) del artículo 9, de la Ley N° 31110 - Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Aquel consiste en que EsSalud determinará las labores de alto riesgo comprendidas dentro de los alcances de ese régimen laboral especial. En este orden de ideas, resulta válido considerar dentro de esa proyección las actividades referidas al cultivo de frutas, pues así lo había estipulado el derogado Decreto Supremo N° 043-2016-SA.

Entonces podemos concluir que la norma bajo comentario tiene un doble impacto en el sector agroexportador. Por un lado, mejora la cobertura de atención en favor del trabajador agrario frente a posibles contingencias en su salud, incluso mejora la cobertura en pensiones; así como eleva el estándar de prevención en salud ocupacional, porque será sometido como mínimo a una evaluación médica periódica una vez al año y, cuando se produzca su ingreso o salida de una empresa, deberá también pasar por este tipo de evaluación. |||



PABLO VELÁSQUEZ FLORES

Asociado senior, especialista en derecho laboral – Sede Ica

Senior Associate, Tax Law specialist - Ica office

pvelasquez@munizlaw.com

The impact of the supplementary risk work insurance (SCTR) in the agricultural export industry

When referring to this industry, it is worth considering the information provided by the Peruvian Association of Agricultural Guilds (AGAP, acronym in Spanish) as a valid source. In this regard, agricultural exports in our country are related to growing crops such as: blueberries, artichokes, citric fruits, asparagus, pomegranates, mangoes, avocados, piquillo peppers and grapes.

In this scenario we review the implications generated by Supreme Decree No. 008-2022-SA, which came into force on July 2, 2022, and updated the list of risky economic activities. Among these activities, those included in Code 0113 - salad plants and melons, roots and tuber crops - are highlighted.

The aforementioned code covers products such as asparagus, artichoke, as well as seed production; therefore, employers engaged in growing these products shall consider taking the SCTR insurance for all workers in their production facilities as a rule of thumb for their labor liability. The exception would be to not take this insurance for workers far from the hazardous activities typical of this line of business.

This insurance offers additional coverage to regular members of Social Security and covers the following risks:

- Health benefits in case of work-related accidents or occupational diseases. They may be freely purchased from the Social Security or the private Health Care Provider of their choice; and,
- Temporary or permanent disability pensions, survivor's pension and burial expenses, as a consequence of work-related accidents or occupational diseases. They may be freely purchased from the ONP (Office for Contingency Normalization, acronym in Spanish) or from duly authorized insurance companies.

The regulation subject matter of this article seeks to mitigate the damage a worker is susceptible to suffer as a result of the execution of agricultural tasks. However, the impact of this legal provision goes even further, as it increases the surveillance levels in workers' health. Agricultural activities are considered risky (CIU 0113), and this generates a mirror-effect in which occupational medical examinations do not have a biannual frequency anymore, since now the agricultural employer must compulsorily put into practice the following medical exams:

- Pre-Occupational Medical Exam.
- Periodic Occupational Medical Exam (at least once a year).
- Retirement or Leaving Occupational Medical Exam.

That being said, employers from the agricultural export industry should project SCTR coverage extends to other crops. This can be inferred from the mandate contained in Article 9 subsection a) of Act No. 31110 - Act on agriculture labor and incentive regime for the agriculture and irrigation, agricultural export and agroindustry sectors. This means EsSalud will determine what qualifies as high risk work within the scope of the special labor regime. Following this line of thought, it is valid to consider fruit crops within that projection, as set forth in repealed Supreme Decree No. 043-2016-SA.

We may conclude that the above mentioned rule has a double impact in the agricultural export sector. It improves health care coverage in favor of the agriculture workers against possible health contingencies. It even improves their pension coverage as well as increases the occupational health prevention standard, because they will take regular medical examination once a year and, whenever they enter or leave a company, they will also take this type of examination. |||



La efectiva articulación interinstitucional como reto de cara a la implementación de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal

En noviembre del año pasado se publicó la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 (en adelante, la “PNM”), la cual constituye un proceso participativo de diálogo en donde convergen los aportes de diversos actores involucrados, entre ellos, el Estado.

La PNM busca implementar soluciones articuladas con el objetivo de que las actividades mineras a pequeña escala se ejecuten de manera responsable y sostenible. Asimismo, resulta de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, sector privado y la sociedad civil; siendo que, la conducción, el seguimiento y la evaluación de esta se encuentra a cargo del Ministerio de Energía y Minas, entidad que deberá establecer los mecanismos de coordinación efectivos para cumplir con sus objetivos prioritarios.

En efecto, la aprobación de la PNM es de suma importancia atendiendo a que constituye la primera

política nacional para el subsector minero y representa un hito para el adecuado desarrollo de las actividades del régimen de la pequeña minería y minería artesanal (en adelante, la “MAPE”), al recoger las demandas y desafíos que enfrenta este vasto sector económico.

¿Cuál es el problema público que atiende la PNM? Pues bien, es el desarrollo de las actividades que realiza la MAPE de manera social, económica y ambientalmente insostenible en los conglomerados mineros y otras zonas permitidas del territorio nacional; problema que, por sí solo, denota la importancia en el cumplimiento de los objetivos prioritarios fijados por esta, los cuales comprenden, entre otros, la reducción de las condiciones de precariedad social, laboral y ambiental, así como una mejor articulación interinstitucional de las entidades vinculadas a dicho estrato.

En efecto, una adecuada coordinación interinstitucional permitiría brindar predictibilidad al proceso de

formalización y al ámbito de intervención de las entidades estatales vinculadas al mismo, evitando cuestionamientos por parte los mineros en vías de formalización u otros agentes de la cadena de valor minera, por la falta de consideración de las características particulares de la actividad que ejecutan dichos mineros, por parte de entidades que comprenden el aparato estatal.

Sobre el particular, es la propia PNM la que advierte este escenario, al señalar que para la MAPE no existe un régimen laboral especial que considere la naturaleza intermitente de la actividad a pequeña escala y que esta no requiere de la formalidad escrita para establecer el vínculo laboral.

Así las cosas, resultaría neurálgico que se pretenda que los mineros informales se comporten como titulares de actividad minera del régimen de la mediana o gran minería o que cuenten con el íntegro de los permisos mineros o autorizaciones para la ejecución de sus actividades, aun cuando el propio marco normativo del proceso de formalización minera contempla la posibilidad de que estos mineros puedan cumplir con los requisitos para la culminación de su proceso de formalización hasta el 2024.

Repárese entonces en la relevancia que representa tener en cuenta las características propias en que se desarrolla la actividad de la MAPE, y que tanto la autoridad sectorial que promueve la formalización de este sector económico, como las demás autoridades del aparato estatal, puedan considerar estos factores al ejecutar sus funciones.

Resulta ser una oportunidad para propiciar una efectiva articulación interinstitucional, la próxima reglamentación que se efectúe al Decreto Legislativo N° 1532, el cual regula el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa (SSCO), norma que entró en vigor el 1 de enero de 2023 y que establece que la Sunat atribuirá la condición de SSCO a aquellos sujetos que no cuenten con las siguientes condiciones mínimas: i) infraestructura o bienes; ii) activo fijo; y, iii) personal.

Considerando lo antes expresado, una adecuada coordinación interinstitucional permitiría que los agentes inscritos en el proceso de formalización, quienes no contarían con las referidas condiciones mínimas, no se encuentren expuestos a adquirir la

condición de SSCO, situación que contravendría el objeto mismo de la estrategia de formalización impulsada por el Estado, siendo de suma importancia que, tanto el Minem como la Sunat, precisen la reglamentación correspondiente considerando las características propias de los mineros en vías de formalización. ■

La aprobación de la PNM es de suma importancia atendiendo a que constituye la primera política nacional para el subsector minero y representa un hito para el adecuado desarrollo de las actividades del régimen de la pequeña minería y minería artesanal (en adelante, la MAPE), al recoger las demandas y desafíos que enfrenta este vasto sector económico.



LUCILA BARJA OTERO

Asociada, especialista en minería y desarrollo sostenible

Associate, specialist in mining and sustainable development

lbarja@munizlaw.com

Effective Interinstitutional Coordination as a Challenge Towards the Implementation of the National Multisectoral Policy for Small-scale Mining and Artisanal Mining

Last November, the National Multisectoral Policy for Small-scale Mining and Artisanal Mining to 2030 (hereinafter "PNM") was published. It constitutes a participative dialogue process in which the contributions of different actors involved - among them, the State - come together.

The PNM aims to implement articulated solutions with the objective of executing small-scale mining activities in a responsible and sustainable way. Likewise, it is mandatory for all public, private and civil entities. Its execution, monitoring and evaluation are under the Ministry of Energy and Mines; this entity will establish effective coordination mechanisms to fulfill their primary objectives.

Indeed, PNM's approval is of utmost importance since it constitutes the first national policy for the mining subsector and represents a milestone for the proper development in small-scale and artisanal mining regime (hereinafter "MAPE"), for it collects the demands and challenges this broad economic sector is facing.

What is the public issue PNM addresses? Well, the development of socially, economically and environmentally unsustainable activities carried out by MAPE in mining clusters and other allowed areas in the national territory. It is an issue that, by itself, shows the importance of fulfilling the primary objectives set out which include, among others, the reduction of social, labor and environmental precariousness conditions as well as improved interinstitutional coordination of the entities linked to said category.

In fact, suitable interinstitutional coordination would make the formalization process and interventions of government bodies linked to it more predictable, preventing questioning from miners in process of formalization or other agents in the mining value chain because of a lack of consideration of the unique characteristics of the activities they execute by said government bodies.

Regarding this, PNM itself notes this scenario when it states that, for MAPE, there is no special labor regime that considers the intermittent nature of small-scale

activities and that it does not require written formalities to set a working relationship.

This being the case, it would be critical to try to make informal miners behave like owners of the medium or large-scale mining activity regime, or that they have all mining licenses or authorizations for the execution of their activities, even though the mining formalization process regulatory framework itself considers miners may meet the requirements and complete the formalization process by 2024.

Notice the relevance of taking into consideration the unique characteristics in which MAPE's activities are developed, and that both the industry authority promoting the formalization of this economic sector and the other government authorities can take these factors into consideration when performing their duties.

This is a good opportunity to encourage effective interinstitutional coordination; the next regulations to be made from Legislative Decree No. 1532 - which rules the procedure to assign the status of person without operational capacity (SSCO, acronym in Spanish). This rule became effective on January 1, 2023 and sets forth that Sunat will assign the SSCO status to individuals who lack the following minimum conditions: i) infrastructure or assets; ii) fixed assets; and iii) staff.

Considering the aforementioned, a proper interinstitutional coordination will prevent agents registered in the formalization process - without the above mentioned minimum requirements - to be exposed to acquiring the SSCO status. This situation would oppose the purpose of the formalization strategy promoted by the State. It is of utmost importance that both Minem and Sunat define the corresponding regulations considering the unique characteristics of miners in process of formalization. |||

Webinars

Llevamos a cabo distintos webinars con nuestros clientes. Nos hemos ocupado de las posibles modificaciones a la ley que regula la responsabilidad de las personas jurídicas; de las nuevas reglas tributarias aplicables este 2023, y de las implicancias tributarias de contratar Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO). ☺

We carried out various webinars with our clients. We have addressed the possible law amendments regulating the legal entities' liability; the new tax regulations applicable for 2023; and the tax implications of hiring Individuals Without Operational Capacity (SSCO, acronym in Spanish). ☺



World Trademark Review

World Trademark Review, la más prestigiosa guía legal especializada en propiedad intelectual, reconoció a nuestro equipo del Departamento de Marcas como una de las prácticas más importantes en materia de derecho de marcas en el Perú. ☺

World Trademark Review, the most prestigious legal directory specialized in intellectual property, acknowledged our Trademark Department team as one of the key practices in Peruvian trademark law. ☺





Chambers and Partners Global 2023

Nuestras especialidades de Capital Markets, Corporate / M&A e Intellectual Property fueron destacadas por la influyente guía legal Chambers and Partners, en su edición global 2023. |||

Our specialties in Capital Markets, Corporate / M&A and Intellectual Property were highlighted by the influential legal directory Chambers and Partners in their global edition 2023. |||

Libro “Derecho de la Competencia”

Pierino Stucchi, socio principal y director del área de Competencia del Estudio Muñiz, presentó su libro “Derecho de la Competencia”, publicado por la Editorial Thomson Reuters y Aranzadi. A este evento asistieron Jorge Muñiz, socio fundador de nuestra firma, y Paulo Comitre, director de ESAN Business Law. Además, estuvieron presentes los gerentes legales de distintas empresas. |||

Pierino Stucchi, senior partner and director of the Competition Department at Estudio Muñiz, presented his book Derecho de la Competencia (Competition Law), published by Editorial Thomson Reuters and Aranzadi. Jorge Muñiz, founding member of our law firm, and Paulo Comitre, ESAN Business Law director, attended this event. The legal managers of many companies were also present. |||



Tendencias 2023

Los expertos legales del Estudio Muñiz presentaron Tendencias 2023, un informe sobre los cambios y posibles nuevos escenarios normativos para el 2023 en una serie de sectores económicos y áreas de especialización. |||

Legal experts at Estudio Muñiz presented Trends 2023, a report on the changes and possible new regulatory scenarios for 2023 in a series of economic sectors and specialization areas. |||



Desayuno Empresarial

Realizamos un desayuno empresarial acerca de las nuevas tendencias en Compliance y cómo asegurar su utilidad con un enfoque estratégico y sostenible. Esta actividad estuvo liderada por Pierino Stucchi, socio principal y director del área de Competencia; José Antonio Bezada, socio de dicha área; y Rodrigo Álvarez y Richard Peña, socios directores de AJ Consulting de Chile. |||

We organize a corporate breakfast on the new trends in Compliance and on how to ensure its usefulness with a strategic and sustainable approach. This activity was lead by Pierino Stucchi, senior partner and director of the Competition Department; José Antonio Bezada, member of the aforementioned area; and Rodrigo Alvarez and Richard Peña, directing members of AJ Consulting of Chile. |||



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú
T (51-1) 611-7000

www.munizlaw.com



ESTUDIO
MUÑIZ

MUÑIZ
OLAYA
MELEÑEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chincha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca